

1608 *ORDEN de 12 de enero de 1990 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 880/1986, promovido por doña Sagrario Marín Sánchez y otros.*

Imos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid ha dictado sentencia con fecha 20 de julio de 1989 en el recurso contencioso-administrativo número 880/1986, en el que son partes, de una, como demandantes, doña Sagrario Marín Sánchez y otros, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de la Presidencia de fecha 15 de octubre de 1985, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 13 de junio de 1985, en las que se les deniega a los interesados su clasificación en el grupo A de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso interpuesto por la Procuradora doña María Gracia Garrido Entrena, en nombre y representación de doña Sagrario Marín Sánchez y otros, relacionados al principio, contra la Resolución de 15 de octubre de 1985 de la Dirección General de la Función Pública, que desestimó los recursos de reposición formulados contra las Resoluciones de dicho Organismo de 11 y 13 de junio de 1985, que denegaron las peticiones de los recurrentes sobre su clasificación en el grupo A de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las indicadas Resoluciones; sin hacer imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 12 de enero de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Imos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

1609 *ORDEN de 12 de enero de 1990 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 714/1988, promovido por don Andrés Rupérez Hergueta.*

Imos. Sres.: La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid ha dictado sentencia con fecha 19 de enero de 1989 en el recurso contencioso-administrativo número 714/1988, en el que son partes, de una, como demandante, don Andrés Rupérez Hergueta, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 8 de abril de 1985, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de MUFACE de 5 de febrero de 1980, sobre pensión de jubilación.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto por don Andrés Rupérez Hergueta contra la resolución de 8 de abril de 1985, de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno, desestimatoria del recurso de alzada que formuló contra resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles de 5 de febrero de 1980, que denegó su petición de cómputo del sueldo regulador de la pensión de jubilación con 15 trienios, debemos revocar y revocamos dichas resoluciones y en su lugar debemos declarar y declaramos que el recurrente tiene derecho al cómputo de un trienio más, completando 15, para la determinación de su pensión, previo abono por el mismo de las cotizaciones por el tiempo de servicios reconocidos de dicho trienio correspondientes a los meses desde 1 de mayo a 31 de octubre de 1978, a cuyo efecto por la Mutualidad se hará el oportuno cálculo de cuotas y pensión que finalmente corresponda con efectos de 1 de noviembre de 1978; sin hacer imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 12 de enero de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Imos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

1610 *ORDEN de 12 de enero de 1990 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1.741/1985, promovido por doña María del Pilar de la Vega Bedate.*

Imos. Sres.: La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid ha dictado sentencia con fecha 6 de mayo de 1989 en el recurso contencioso-administrativo número 1.741/1985, en el que son partes, de una, como demandante, doña María del Pilar de la Vega Bedate, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de la Presidencia (Dirección General de la Función Pública) de 26 de noviembre de 1985, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del mismo Ministerio de 25 de junio de 1985, en las que se le deniega a la recurrente el reconocimiento del complemento especial contemplado en la disposición final quinta de la Ley 31/1965, de 4 de mayo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María del Pilar de la Vega Bedate contra resoluciones de la Dirección General de la Función Pública de 25 de junio y 26 de noviembre de 1985, por la que se deniega a la recurrente el reconocimiento del complemento especial regulado en la disposición final quinta de la Ley 31/1965, de 4 de mayo, así como el abono de las diferencias consiguientes al adelanto de la fecha de vencimiento de los trienios por reconocimiento de dos años de servicios consolidados por la categoría de Oficial de primera clase, debemos declarar y declaramos la nulidad de las resoluciones recurridas por ser contrarias a derecho y, en su lugar, debemos declarar el derecho de la recurrente a que le sean reconocidos los dos años de servicios por la categoría citada y a que se le abonen las diferencias derivadas del adelanto del cumplimiento de trienios, con efectos de los cinco años anteriores a la reclamación, a que se entiende referida ésta, sin hacer imposición de las costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 12 de enero de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Imos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

1611 *ORDEN de 12 de enero de 1990 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-administrativo número 212/1987, promovido por don José Fermín Borges Cedres.*

Imos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia con fecha 27 de septiembre de 1989 en el recurso contencioso-administrativo número 212/1987, en el que son partes, de

una, como demandante, don José Fermín Borges Cedres, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 23 de febrero de 1987, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la MUFACE de fecha 30 de abril de 1986, sobre reintegro de los gastos por asistencia sanitaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar el recurso, anulando por contrario a Derecho el acto impugnado, declarando el derecho del actor a que se le reintegren la cantidad de 193.800 pesetas que reclama. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 12 de enero de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

1612 *ORDEN de 7 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1.288/1986, interpuesto contra este Departamento por doña Caridad Rovira García.*

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 15 de abril de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), en el recurso contencioso-administrativo número 1.288/1986, promovido por doña Caridad Rovira García, sobre adjudicación de una plaza de Fisioterapeuta en el Hospital «Primero de Octubre», cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Caridad Rovira García contra la Resolución de la Dirección General de Provisión del Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 23 de julio de 1985, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante contra la propuesta formulada por la Comisión Provincial sobre adjudicación de una plaza de Fisioterapeuta en el Hospital «Primero de Octubre», de Madrid, a favor de doña María Teresa Sarasola Cilleruelo, que fue recurrida en reposición, y, posteriormente, ante la Comisión Central de Reclamaciones, para llegar a la alzada, objeto de este recurso, por ser ésta conforme a derecho, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos no haber lugar a las declaraciones solicitadas en los cinco apartados del suplico de la demanda; sin hacer especial imposición de las costas.»

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 7 de diciembre de 1989.-P. D., el Director general de Servicios, Juan Alarcón Montoya.

Ilmos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y Director general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

1613 *ORDEN de 7 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.369, interpuesto contra este Departamento por don José Luis Cortés García.*

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 21 de julio de 1989 por la Sección Cuarta

de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.369, promovido por don José Luis Cortés García, sobre sanción impuesta al recurrente como titular de una oficina de Farmacia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis Cortés García, contra la Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, de fecha 13 de octubre de 1986, así como frente a la también Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, de 18 de diciembre de 1987, esta última desestimatoria del recurso de alzada contra la primera formulada, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones, por su disconformidad a Derecho, en cuanto no se ajusten a los siguientes pronunciamientos:

Imponer e imponemos al recurrente una ilativa sanción económica de 5.000 pesetas por cada una de las tres infracciones del caso, con un montante total la referida sanción de 15.000 pesetas; ordenando en consecuencia la devolución al demandante de las cantidades que por éste se hubieren pagado en exceso y en concepto de sanciones.

Absolver y absolvemos al recurrente de la obligación de resarcir a la Seguridad Social de cantidad alguna en concepto de perjuicios económicos derivados de las conductas de aquél ahora bajo examen; ordenando la devolución al actor de todo cuanto por éste se hubiere pagado en tal concepto.

Sin expresa imposición de costas.»

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso por el señor Abogado del Estado recurso de apelación, el cual ha sido admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 7 de diciembre de 1989.-P. D., el Director general de Servicios, Juan Alarcón Montoya.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Farmacia y Productos Sanitarios.

1614 *ORDEN de 7 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 339/1988, interpuesto contra este Departamento por el Colegio Oficial de ATS y Diplomados en Enfermería de Barcelona.*

De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 5 de abril de 1989, por el excelentísimo Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 339/1988, promovido por el Colegio Oficial de ATS y Diplomados en Enfermería de Barcelona, contra la Orden de este Ministerio, de 8 de agosto de 1986, por la que se fijan las retribuciones del personal dependiente del INSALUD, ICS y RASSSA, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo, número 339/1988, promovido por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación del Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Barcelona, contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 8 de agosto de 1986, por la que se fijaban las retribuciones del personal dependiente del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Catalán de la Salud y Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social en Andalucía, cuya Orden, en los particulares impugnados en el proceso, confirmamos, por resultar conforme a Derecho y absolviendo a la Administración de los pedimentos contra ella formulados, no hacemos pronunciamiento especial sobre las costas causadas.»

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 7 de diciembre de 1989.-P. D., el Director general de Servicios, Juan Alarcón Montoya.

Ilmos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y Director general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

1615 *ORDEN de 7 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) en el recurso contencioso-administrativo número 296/1988, interpuesto contra este Departamento por don Juan Manuel Moraleda Bocanegra.*

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la